

REVISTA IIDH

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
INSTITUT INTER-AMÉRICAIN DES DROITS DE L'HOMME
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DEREITOS HUMANOS
INTER-AMERICAN INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS



36

**Edición Especial sobre
Educación en Derechos Humanos**
Julio-Diciembre 2002

REVISTA
IIDH

Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Institut Inter-Américain des Droits de l'Homme
Instituto Interamericano de Direitos Humanos
Inter-American Institute of Human Rights

© 1995, IIDH. INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Revista
341.481

Revista IIDH/Instituto Interamericano de Derechos
Humanos.-Nº1 (Enero/junio 1985)
-San José, C. R.: El Instituto, 1985-
v.; 23 cm.

Semestral

ISSN 1015-5074

1. Derechos humanos-Publicaciones periódicas

Las opiniones expuestas en los trabajos publicados en esta Revista son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no corresponden necesariamente con las del IIDH o las de sus donantes.

Esta revista no puede ser reproducida en todo o en parte, salvo permiso escrito de los editores.

Diagramado y montaje electrónico de artes finales: Unidad de Información del IIDH.

Impresión litográfica: Imprenta y Litografía Mundo Gráfico S.A.

La Revista IIDH acogerá artículos inéditos en el campo de las ciencias jurídicas y sociales, que hagan énfasis en la temática de los derechos humanos. Los artículos deberán dirigirse a: Editores Revista IIDH; Instituto Interamericano de Derechos Humanos; A. P. 10.081-1000 San José, Costa Rica.

Se solicita atender a las normas siguientes:

1. Se entregará un original y una copia escritos a doble espacio, dentro de un máximo de 45 cuartillas tamaño carta. El envío deberá acompañarse con disquetes de computador, indicando el sistema y el programa en que fue elaborado.
2. Las citas deberán seguir el siguiente formato: apellidos y nombre del autor o compilador; título de la obra (en letra cursiva); volumen, tomo; editor; lugar y fecha de publicación; número de página citada. Para artículos de revistas: apellidos y nombre del autor, título del artículo (entre comillas); nombre de la revista (en letra cursiva); volumen, tomo; editor; lugar y fecha de publicación; número de página citada.
3. La bibliografía seguirá las normas citadas y estará ordenada alfabéticamente, según los apellidos de los autores.
4. Un resumen de una página tamaño carta, acompañará a todo trabajo sometido.
5. En una hoja aparte, el autor indicará los datos que permitan su fácil localización (Nº fax, telef., dirección postal y correo electrónico). Además incluirá un breve resumen de sus datos académicos y profesionales.
6. Se aceptará para su consideración todos los textos, pero no habrá compromiso para su devolución ni a mantener correspondencia sobre los mismos.

La Revista IIDH es publicada semestralmente. El precio anual es de US\$36,00. El precio del número suelto es de US\$17,00. Estos precios incluyen el costo de envío por correo regular.

Todos los pagos deben de ser hechos en cheques de bancos norteamericanos o giros postales, a nombre del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Residentes en Costa Rica pueden utilizar cheques locales en dólares. Se requiere el pago previo para cualquier envío.

Dirigir todas las órdenes de suscripción a la Unidad de Información del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, A. P. 10.081-1000 San José, Costa Rica.

Las instituciones académicas, interesadas en adquirir la Revista IIDH, mediante canje de sus propias publicaciones pueden escribir a la Unidad de Información del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, A. P. 10.081-1000 San José, Costa Rica.

Índice

Presentación

Roberto Cuéllar 7

PROTECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Contenido y vigencia del derecho a la educación15
Katarina Tomasevski

O fortalecimento da indivisibilidade dos
direitos humanos no sistema interamericano:
efetiva garantia para o direito à educação39
Indira Bastos Marrul

Mecanismos de protección de los derechos humanos
de las mujeres en el sistema interamericano75
Leonor C. López Vega

Human rights in Sweden 107
Jessica Sandberg

CONTEXTO SOCIAL LATINOAMERICANO DE LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

La educación en el marco del nuevo capitalismo131
Juan Carlos Tedesco

Educación en Derecho Internacional Humanitario149
Alma Baccino de Pérez Abella

Estado y sociedad civil como actores principales en la educación en derechos humanos: el caso de México167
Aida Margarita Flores Díaz

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Educación, refugiados y personas desplazadas193
Janice Marshall

Derechos humanos y género: desafíos para la educación en la Argentina contemporánea219
Eleonor Faur

Educación en y para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en riesgo249
Silvia Larumbe Canalejo

El derecho a la educación en las cárceles como garantía de la educación en derechos humanos291
Francisco José Scarfó

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Derechos humanos y curriculum escolar327
Abraham Magendzo K.

La metodología de la educación en derechos humanos341
Rosa María Mujica

Presentación

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos se complace en presentar el número 36 de su Revista IIDH, cuarto de una serie de números especializados. En esta ocasión el tema es la educación en derechos humanos, uno de los derechos de énfasis de la labor institucional y eje temático del XX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos, llevado a cabo del 27 de julio al 2 de agosto de 2002, en San José de Costa Rica, y dedicado a la memoria del Dr. Rodolfo E. Piza Escalante. Este ejemplar recoge las ponencias de algunos de sus docentes, así como trabajos de investigación de varias personas participantes en el mismo curso académico.

Para el IIDH, la educación en derechos humanos representa un mandato fundacional, una apuesta política y una práctica permanente. Desde su creación en 1980, el IIDH fue concebido como una institución académica cuyo mandato es fomentar la educación, investigación y promoción de los derechos humanos. No es accidental que su fundación y su creación fuera una importantísima iniciativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al contrario, fue uno de los primeros jueces de la CIDH, Dr. Thomas Buerghental, quien vislumbró la necesidad de una institución que, haciendo labor eminentemente educativa, apoyara al recién completado Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El IIDH nace, entonces, apostando por la educación como el desafío para avanzar en el reconocimiento y la vigencia de los derechos humanos en esta desigual región del mundo.

La educación en derechos humanos es parte esencial de la misión y de la visión del IIDH y se basa en el reconocimiento de un derecho humano muy propio en el ejercicio de la democracia. Después de más de veinte años de creación, y de un cambio favorable en el mapa de las violaciones a los derechos humanos en la región donde las violaciones graves y sistemáticas han dejado de ser el enfoque primario de atención, se requiere encarar otro tipo de promoción en temas no menos complejos. Los precarios niveles de acceso a la educación en la región, y los bajísimos niveles de accesibilidad del sistema educativo en perjuicio de los sectores más vulnerables y marginados de la población hemisférica, desatan una concatenación de otras formas de violación a otros derechos humanos: el derecho a la cultura, acceso al conocimiento y a formas de lograr mejores opciones al trabajo y condiciones de vida, acceso a la justicia y a los programas de participación política, y los demás derechos interrelacionados con la realización de todos los derechos humanos para alcanzar un nivel de vida digno y de desarrollo democrático.

La educación en derechos humanos es la herramienta principal para propiciar cambios en las competencias, actitudes y comportamientos en los funcionarios públicos, los líderes políticos y en las organizaciones de la sociedad civil, lo que permitirá la generación y despliegue de sistemas políticos incluyentes, mayor transparencia, menos violencia e inseguridad y la reducción de la exclusión social entre los sistemas democráticos del hemisferio americano.

El Instituto concibe la educación en derechos humanos como un componente del derecho a la educación y como condición necesaria para el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos y para la vida en democracia. La define como la posibilidad real de todas las personas -independientemente de su sexo, origen nacional o étnico y condiciones económicas, sociales o culturales- de recibir educación sistemática, amplia y de buena calidad que les permita: comprender sus derechos humanos y sus respectivas responsabilidades; respetar y proteger los derechos humanos de otras personas; entender la interrelación entre derechos humanos, estado de derecho y gobierno

democrático, y ejercitar en su interacción diaria valores, actitudes y conductas consecuentes con los derechos humanos.

Con el desarrollo histórico y doctrinario del último medio siglo, la educación en derechos humanos ha ganado tal fuerza e importancia que hoy se la reconoce como un componente necesario del derecho a la educación o como un derecho independiente que está en proceso de reconocimiento (un derecho emergente). Razón de más, entonces, para subrayar como contrapartida necesaria, el deber de los estados de implementarla como derecho colectivo y de forma sistemática.

En ese sentido, el IIDH ha dirigido buena parte de sus esfuerzos a la capacitación de agentes multiplicadores en todo el continente, así como a la producción y distribución de materiales educativos en impresos, audiovisuales y electrónicos. Actualmente cuenta con más de 100 títulos especializados en el tema de educación en derechos humanos tanto para los niveles primario, secundario y universitario así como para poblaciones específicas. Asimismo, ofrece diferentes materiales con sugerencias metodológicas para la educación en derechos humanos.

Adicionalmente, tomando en cuenta los nuevos desarrollos tecnológicos y el acceso creciente a la Internet en nuestro continente, el IIDH desarrolla y mantiene un espacio virtual dirigido a ofrecer a todas la personas interesadas en la educación en derechos humanos diversas herramientas pedagógicas que apoyen su trabajo cotidiano. Esta sección especializada del sitio en Internet del Instituto, *Herramientas pedagógicas para la educación en derechos humanos*, se puede acceder mediante la siguiente dirección: <http://www.iidh.ed.cr/comunidades/HerrPed/>.

Por otro lado, a fines del 2002, el Instituto presentó el *Informe interamericano de la educación en derechos humanos*, el cual mide progresos normativos en la afirmación de ese derecho en los diecinueve países de la región que han suscrito o ratificado el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). Tiene por objeto identificar aquellas tendencias que puedan constituir un progreso en su reconocimiento y garantías como derecho humano, tal como este se encuentra establecido en el artículo 13 del mencionado Protocolo y otros convenios internacionales ratificados por los países indicados.

Se trata del primero de cuatro informes sobre el tema: el segundo informe (2003), versará sobre las variaciones en el diseño y en los contenidos del currículo oficial que expresen las nuevas condiciones jurídicas y políticas, las modificaciones en los planes y programas para los niveles educativos en los que la educación en derechos humanos se planteara como obligatoria y las modificaciones en los contenidos y formas de los textos escolares para algunos niveles seleccionados; el tercer informe (2004) tratará sobre las variaciones en la situación de programas especiales de educación en derechos humanos, particularmente en el currículo y los programas para la formación de los docentes, en las actividades de formación de personal de fuerzas armadas y policía, en los cursos para jueces y funcionarios públicos en general, así como las variaciones en la inserción de la temática en las carreras universitarias; el cuarto y último informe (2005) detallará las variaciones en las actividades no formales (no escolares) de educación, capacitación y promoción en derechos humanos y en la situación de las organizaciones no gubernamentales y otros prestadores de servicios educativos en derechos humanos, incluyendo su composición, cobertura territorial, áreas de trabajo, producción de materiales, tipo y cantidad de beneficiarios.

Es en el marco de su intensa y productiva labor en educación en derechos humanos que el IIDH ofrece este número de su Revista IIDH. El mismo se estructura en cuatro secciones, que llevan a la persona lectora de lo genérico a lo específico en el tema de la educación en derechos humanos: protección nacional e internacional de los derechos humanos; contexto social latinoamericano de la educación en derechos humanos; educación en derechos humanos en

grupos en situación de vulnerabilidad; aspectos teóricos-metodológicos de la educación en derechos humanos.

La primera sección reúne los aportes de Katarina Tomasevski (Croacia), docente del XX Curso, y de Indira Bastos (Brasil), Leonor López Vega (España) y Jessica Sandberg (Suecia), participantes en el mismo. En la segunda sección se presentan trabajos de Juan Carlos Tedesco (Argentina) y Alma Baccino de Pérez Abella (Uruguay), docentes, y Aída Margarita Flores (México), participante. La tercera sección reúne los trabajos de Janice Marshall (Canadá), docente, y de Leonor Faur (Argentina), Silvia Larumbe (España) y Francisco Scarfó (Argentina), participantes. Finalmente, en la cuarta sección se reúnen los aportes de Abraham Magendzo (Chile) y Rosa María Mujica (Perú), docentes del Curso.

Los trabajos publicados reflejan la variedad de enfoques teóricos y prácticos y la pluridisciplinariedad y multisectorialidad de los participantes y docentes del XX Curso, por demás necesario para abordar esta temática, presentando no sólo trabajos en el ámbito interamericano, sino también internacionales, lo que muestra el alcance del IIDH en la materia de educación en derechos humanos.

Roberto Cuéllar
Director Ejecutivo

Protección nacional e internacional de los derechos humanos

O fortalecimento da indivisibilidade dos direitos humanos no sistema interamericano: efetiva garantia para o direito à educação

*Indira Bastos Marrul**

“Todos experimentamos a indivisibilidade dos direitos humanos no cotidiano de nossas vidas. Todos os direitos humanos para todos, é este o único caminho seguro para a atuação lúdica no campo da proteção dos direitos humanos”.

Antônio Augusto Cançado Trindade

Introdução

O direito à educação é parte do núcleo de direitos fundamentais, os quais são requisitos à dignidade de todo e qualquer cidadão. Contudo, na América Latina, esse direito, apesar de consagrado na grande maioria das constituições, ainda não é devidamente garantido e implementado. Essa situação demanda iniciativas inovadoras de mobilização interinstitucional e social, assim como de responsabilização legal, que possam, a curto prazo, contribuir para a universalização de um ensino de qualidade.

Nesse sentido, a atuação dos órgãos do Sistema Interamericano de proteção dos direitos humanos mostra-se como um dos principais caminhos para a realização plena do direito à educação.

Nos diversos sistemas de promoção e proteção aos direitos humanos, o desenvolvimento da proteção aos direitos civis e políticos foi prioridade até o fim da Guerra Fria, enquanto a proteção aos direitos econômicos, sociais e culturais, dentre eles o direito à educação, foi negligenciada. Essa situação tem mudado desde o fim dessa guerra. Importantes acontecimentos, como o processo de

* Mestranda em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília.

redemocratização em alguns países e a realização das Conferências Mundiais de Direitos Humanos (Teerã e Viena), contribuíram sobremaneira para tais transformações. Sinais dessas mudanças podem ser encontrados na história do Sistema Interamericano. A abertura à assinatura, em 1988, do Protocolo de São Salvador e sua entrada em vigor, em 1999, são os mais importantes deles.

No presente estudo, pretendo analisar o tratamento dispensado pelo Sistema Interamericano dos Direitos Humanos à proteção e à promoção do Direito à Educação como parte do núcleo dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Objetiva-se identificar se há uma tendência do Sistema, mais especificamente da Corte Interamericana, a garantir cada vez mais esse direito a partir da argumentação de que a proteção aos direitos econômicos, sociais e culturais tem aumentado na prática do Sistema Interamericano nos últimos dez anos. Para isso, serão identificados os fatores que contribuíram para a intensificação do processo de reconhecimento dos direitos econômicos, sociais e culturais no Sistema Interamericano a partir de uma análise histórica e da prática atual do Sistema.

A primeira parte do presente artigo apresenta a evolução histórica dos direitos humanos; o surgimento da dicotomia entre os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais; e o papel das Conferências de Teerã e Viena na consagração do princípio da indivisibilidade dos direitos humanos. Na segunda parte, será apresentado o funcionamento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos a partir de um histórico do Sistema, dos órgãos que o compõe - Comissão e Corte Interamericanas de Direitos Humanos - e de seus principais instrumentos. Na terceira, os fatores que contribuíram para a consagração da indivisibilidade dos direitos humanos no Sistema Interamericano e para o desenvolvimento de uma consciência a respeito da necessidade dessa consagração e do seu desenvolvimento na prática do Sistema. Por fim, a título de conclusão, será analisado o caso específico do tratamento dispensado pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos à proteção e à promoção do direito à educação.

1. A história da universalização dos direitos humanos

Apesar da proteção ao que hoje chamamos direitos humanos ter tido sua primeira manifestação formal na Inglaterra, em 1215, com a Magna Carta, como observou a pensadora Hannah Arendt¹, as liberdades individuais e sociais somente adquiriram a condição de direitos naturais, inalienáveis e inconfiscáveis, passando a desenvolver um papel revolucionário, quando, na era moderna, e não antes, os homens começaram a duvidar que a pobreza fosse inerente à condição humana. Conforme Júlio Marino de Carvalho, “dizem-se humanos os direitos de que o indivíduo é titular só pela razão básica de pertencer ao gênero humano (...) mesmo quando despidos de qualquer instrumento jurídico, os direitos humanos inspiram, há séculos, preocupações à sociedade dos homens a qual se dispôs a observá-los e a considerá-los sob inspiração instintiva do direito natural, embora então de maneira lacunosa e vacilante”².

Assim, conforme Norberto Bobbio, “os direitos do homem são direitos históricos, que emergem gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria emancipação e das transformações das condições de vida que essas lutas produzem”³.

Segundo esse autor, o fundamento dos Direitos Humanos consiste, certamente, em um fundamento histórico e, como tal, não absoluto. O universalismo dos direitos humanos tem sido uma lenta conquista que, segundo Bobbio, apresenta três fases. A primeira deve ser buscada na obra dos filósofos e apresenta os direitos humanos como universais em relação ao seu conteúdo. Essa fase é representada pelo fato de que o “(...) homem enquanto tal tem direitos, por natureza, que ninguém (nem mesmo o Estado) lhe pode subtrair, e que ele mesmo não pode alienar(...)”⁴.

Na segunda fase, os direitos humanos ganham em concreticidade, mas perdem em universalidade. Nessa fase, a teoria é acolhida por

¹ DIAS, V.V. A CEPAL e os Direitos econômicos, Sociais e Culturais. In: TRINDADE, A. A. C. (editor) *A Incorporação das normas internacionais de proteção dos direitos humanos no direito brasileiro*. 2ª. ed. San José: IIDH, 1996. p. 665

² CARVALHO, J.M. *Os Direitos Humanos no Tempo e no Espaço*. Brasília: Ed. Brasília Jurídica, 1998 p. 47 e 48.

³ BOBBIO, N. *A Era dos Direitos*. Rio de Janeiro: Campus, 1992 p.32.

⁴ *Idem*, p. 28.

uma legislação, o que ocorre com as Declarações de Direitos dos Estados Norte-americanos (1776) e da Revolução Francesa (1789). Os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade e à resistência às tiranias são doravante protegidos, mas valem somente no âmbito do Estado que os reconhecem, sendo esses apenas direitos do cidadão.

Com a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, em 1948, não apenas os cidadãos dos Estados passaram a ser titulares de direitos, mas sim todos os homens. Nessa terceira fase,

“a afirmação dos direitos humanos é, ao mesmo tempo, universal e positiva: universal no sentido de que os destinatários dos princípios nela contidos não são mais apenas os cidadãos deste ou daquele Estado, mas todos os homens; positiva no sentido de que põe em movimento um processo em cujo final os direitos do homem deverão ser não mais apenas proclamados ou apenas idealmente reconhecidos, porém efetivamente protegidos até mesmo contra o próprio Estado que os tenha violado”⁵.

Portanto, “os direitos dos homens nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares, para finalmente encontrarem sua realização como direitos positivos universais”⁶.

No mundo contemporâneo, segundo Norberto Bobbio, a questão do fundamento dos direitos humanos perdeu sua importância, na medida em que a maioria dos Estados aderiu aos instrumentos internacionais de proteção a esses direitos. Para ele, o fundamento dos direitos humanos consiste, certamente, em um fundamento histórico e, como tal, não absoluto. O universalismo dos direitos humanos tem sido uma lenta conquista. Assim, “(...) os direitos dos homens nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares, para finalmente encontrarem sua realização como direitos positivos universais”⁷.

No entanto, o simples fato de vários Estados terem assumido compromissos internacionais de proteção aos direitos humanos não

⁵ *Ibidem*, p. 30

⁶ *Ibidem*, p. 30

⁷ *Ibidem*, p. 32

afastou todas as controvérsias sobre esse assunto. Temos, como exemplo, a dificuldade de obtenção de consenso internacional acerca do tratamento que deve ser dado a algumas práticas culturais.

Mas, então, qual seria, hoje, o fundamento ou “referencial ético para a formação de laços de solidariedade intersubjetiva, sem os quais não há possibilidade de afirmação dos direitos do homem”⁸?

É a Declaração Universal dos Direitos Humanos que nos indica a resposta. Em seu parágrafo inicial do Preâmbulo está postulado que “(...) o reconhecimento da *dignidade* inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o *fundamento* da liberdade, da justiça e da paz no mundo”⁹. A dignidade humana, portanto, é reconhecidamente, o fundamento de todos os direitos do homem.

Assim, quando falamos em direitos humanos, não estamos falando de quaisquer direitos, mas de direitos muito especiais, que visam proteger a dignidade de cada um.

1.1 Direitos civis e políticos vs. direitos econômicos, sociais e culturais

A Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada pelo Conselho Econômico e Social, em 1946, com o objetivo central de elaborar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual foi aprovada pela Assembléia Geral em 10 de Dezembro de 1948 com apenas oito abstenções (bloco socialista) e nenhum voto contrário¹⁰. A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirmou a universalidade desses direitos ao consagrar o princípio de que eles não se reduzem ao domínio reservado do Estado. Além disso, afirmou a proteção do indivíduo em esfera internacional como sujeito de direito.

Em 1950, a Comissão de Direitos Humanos recebeu a missão de elaborar um tratado internacional sobre direitos humanos que viesse

⁸ SUIAMA, S. G. *Sobre o fundamento dos direitos humanos*. Disponível em: www.pge.sp.gov.br em setembro de 2000.

⁹ Grifo do autor.

¹⁰ O bloco socialista absteve-se por considerar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos priorizava os direitos civis e políticos e negligenciava os direitos econômicos, sociais e culturais.

a ter efeito vinculante, uma vez que a Declaração Universal era uma resolução da ONU e não um tratado, portanto não tinha força jurídica obrigatória, apenas força de obrigação consuetudinária. No mesmo ano, a Assembléia Geral adotou uma resolução recomendando a plena interdependência dos direitos humanos, solicitando, assim, à Comissão a elaboração de um único pacto.

No entanto, em 1951, os países ocidentais reverteram essa decisão e indicaram a adoção de dois pactos distintos. Com essa decisão, os países pretendiam criar uma contraposição irreconciliável entre os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais, ou seja, pretendiam criar duas categorias de direitos mutuamente excludentes. A literatura especializada utiliza o termo dicotomia para descrever essa desagregação dos direitos humanos.

Dessa forma, por decisão da Assembléia Geral, essa Comissão elaborou, em 1966, dois instrumentos internacionais: o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em vigor desde 1976, e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em vigor desde 1977, que complementaram a Declaração Universal, salvaguardando os direitos nela estabelecidos pela força da obrigação jurídica internacional que os Estados passaram a ter. Assim, foi violado o princípio da indivisibilidade.

Cabe ressaltar que essa separação dos direitos humanos em dois pactos diferentes fez parte da lógica de um momento histórico marcado por disputas ideológicas, quando o bloco socialista defendia a primazia dos direitos econômicos, sociais e culturais, os quais exigiam obrigações positivas por parte do Estado, ou seja, representavam os direitos de aplicação progressiva. Diferentemente, o bloco capitalista defendia a maior importância dos direitos civis e políticos, representados por aqueles de aplicação imediata que exigiam uma obrigação de abstenção do Estado.

Os dois pactos tiveram no seu processo de adoção e aplicação, grandes dificuldades. A principal dificuldade, quanto à adoção, diz respeito ao princípio da não intervenção. Alguns Estados defendiam que esses instrumentos feriam esse princípio do direito internacional já consagrado. No entanto, a entrada na ONU dos países que se tornaram independentes nas décadas de 60 e 70, possibilitou a adoção dos dois pactos, devido ao fato da comunidade internacional

ter percebido a existência de algumas situações em que a intervenção em assuntos domésticos era legítima, como o foi o caso do *apartheid* e como é o caso da defesa dos direitos humanos.

No que diz respeito à aplicação dos Pactos, uma das maiores dificuldades tem sido a contradição existente entre as obrigações assumidas pelos Estados e a dinâmica da execução dos direitos previstos, principalmente, no Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Essas obrigações tornam-se enfraquecidas pela “*impossibilidade de se verificar como e por quem esses direitos devem ser atendidos*”¹¹.

Historicamente, como ressalta Antônio Augusto Cançado Trindade¹², o processo de generalização e expansão dos direitos humanos, em sua totalidade, tem sido marcado pelo fenômeno da multiplicidade e diversidade dos mecanismos de proteção, com uma ênfase marcante na proteção dos direitos civis e político. Esse processo tem sido acompanhado pela identidade predominante de propósito desses últimos, sem que, no entanto, a unidade conceitual dos direitos humanos, constituída pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, tenha sido abalada.

Os direitos humanos têm sido divididos, portanto, em duas categorias que fazem parte de um todo interdependente e indivisível. A classificação dos direitos humanos tradicionalmente adotada os divide em: Direitos Civis e Políticos e Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

1.2 A indivisibilidade dos direitos humanos: conferências de Teerã e Viena

O reconhecimento gradual do princípio da indivisibilidade deve-se à preocupação de que, sem a efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais, os direitos civis e políticos se reduzem a meras categorias formais. Ao passo que, sem a realização dos direitos civis e políticos, ou seja, sem a efetividade da liberdade entendida em seu mais amplo sentido, os direitos econômicos, sociais e culturais carecem de verdadeira significação.

¹¹ DIAS, V.V. *op cit* p. 667

¹² TRINDADE, A. A. C. *A Proteção Internacional dos Direitos Humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos básicos*. São Paulo: Saraiva, 1991.

A atualidade é marcada pelo fato de lutar-se, em todo mundo, de uma forma diversa pelos direitos civis e políticos e pelos direitos econômicos, sociais e culturais. Na realidade, hoje eles não coexistem, mas, em vias de princípio, são duas espécies de direitos que, para serem verdadeiramente garantidos, devem existir solidários:

“Recorde-se, a esse propósito, a existência - dentre os direitos humanos em geral - de um núcleo de direitos fundamentais que (...) não admitem qualquer tipo de derrogação. Tal núcleo de direitos básicos de caráter inderrogável, cuja existência constitui hoje não apenas fruto de uma corrente doutrinária mas sobretudo uma conquista definitiva da civilização, comporta hoje, e.g., os direitos à vida, à não ser submetido à tortura ou escravidão, à não ser condenado por aplicação retroativa das penas. (...) Não surpreende, assim, que o concurso dos fatos supracitados (...) tenha levado, nas duas últimas décadas, ao gradual reconhecimento generalizado da necessidade de reconsideração da dicotomia entre os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais”¹³.

Nas últimas décadas, houve uma reconsideração geral da dicotomia gerada na fase legislativa dos tratados de direitos humanos em função do momento histórico marcado por uma profunda divergência ideológica. A I Conferência Mundial de Direitos Humanos realizada em Teerã, de 22 de abril a 13 de maio de 1968, proclamou a superação da competência nacional exclusiva, a asserção da capacidade internacional das organizações internacionais e aumentou o reconhecimento da capacidade dos indivíduos.

Além disso, com a Conferência de Teerã, os princípios da universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos foram afirmados e puseram um final “teórico” à visão compartimentada dos direitos humanos. Os oitenta e quatro (84) países reunidos nessa Conferência ao adotarem a Proclamação de Teerã, em seu parágrafo 13, afirmaram que: “Uma vez que os direitos humanos e as liberdades fundamentais são indivisíveis, a realização plena dos direitos civis e políticos sem o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais é impossível”.

¹³ TRINDADE, A. A. C. A questão da Implementação dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: Evolução e tendências atuais. In: *Revista Brasileira de Estudos Políticos*. Julho de 1990, número 71. p. 15

Em junho de 1993, realizou-se a II Conferência Mundial de Direitos Humanos em Viena, na qual os princípios da universalidade, da interdependência e da indivisibilidade dos direitos humanos foram definitivamente consagrados¹⁴. Os principais objetivos dessa Conferência eram rever e avaliar os avanços dos direitos humanos, identificar meios de superar obstáculos, examinar a relação entre desenvolvimento e direitos humanos, examinar os meios de aprimorar a implementação dos tratados, avaliar a eficácia dos métodos existentes, elaborar recomendações para avaliar a eficácia dos tratados e elaborar recomendações para assegurar recursos para a implementação dos tratados.

Essa Conferência foi marcada pela sua grande complexidade, tendo em vista a quantidade de Estados (171) e de organizações não-governamentais (248) que dela participaram e o difícil momento histórico marcado por uma intensa recessão econômica, pelo crescimento da pobreza extrema e pela implosão de conflitos internos em vários países. A complexa realidade contemporânea e a difícil tarefa de realizar esses direitos em sociedades distintas em suas tradições culturais e características econômicas e sociais estão refletidos na Declaração e no Programa de Ação de Viena.

Mesmo com essas dificuldades, a Conferência de Viena “ênfatizou, em uma dimensão horizontal, os meios de se lograr maior coordenação, sistematização e eficácia dos múltiplos mecanismos de proteção existentes, e, em uma dimensão vertical, a incorporação e as medidas nacionais de implementação daqueles instrumentos, e o fortalecimento das instituições nacionais diretamente vinculada à vigência plena dos direitos humanos e ao Estado de Direito”¹⁵.

A Conferência de Viena afirmou a obrigatoriedade dos direitos humanos em sua totalidade como uma obrigação *erga omnes*, bem como reafirmou a legitimidade da preocupação da comunidade internacional ante violações desses direitos. Essa Conferência

¹⁴ TRINDADE, A. A. C. A II Conferência Mundial de Direitos Humanos: O legado de Viena. In: TRINDADE, A. A. C. (editor). *A Incorporação das normas internacionais de proteção dos direitos humanos no direito brasileiro*. 2^a. ed. San José: IIDH, 1996.

¹⁵ TRINDADE, A. A. C. A proteção Internacional dos Direitos Humanos ao final do Século XX. In: MARIANO, B. D. e FECHIO FILHO, F. (orgs.) *A Proteção Nacional e Internacional dos Direitos Humanos: Seminário de Brasília*. Brasília: FIDEH, 1994. p. 107.

deixou como principal herança a reafirmação e a incorporação da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos no artigo 5º da Declaração de Viena.

Portanto, a I Conferência Mundial de Direitos Humanos - Teerã, 1968 - fortaleceu o princípio da universalidade e a asserção da indivisibilidade, representando, assim, a fase histórica legislativa dos direitos humanos, na qual a internacionalização desses direitos, obtida com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, deu face à sua globalização.

Já a II Conferência Mundial de Direitos Humanos - Viena, 1993 - veio avaliar experiências, examinar problemas, aprimorar instrumentos e dotá-los de maior eficácia dentro dos imperativos da universalidade e indivisibilidade afirmados em Teerã e consagrados em Viena. A II Conferência representou, portanto, a fase histórica da implementação dos direitos humanos, na qual a sua globalização foi acrescida da consagração da indivisibilidade.

O processo de formação de uma cultura universal de observância dos Direitos Humanos recebeu importantes contribuições da Proclamação de Teerã e da Declaração de Viena, sendo que aquela proclamou a visão global da indivisibilidade e a interrelação dos direitos humanos, enquanto esta poderá gerar os mesmos efeitos no caso de sua aplicação assegurar, na prática, tal indivisibilidade¹⁶.

¹⁶ *Idem*, p. 106.

2. O sistema interamericano de promoção e proteção dos direitos humanos

A Organização dos Estados Americanos (OEA) é uma organização internacional criada pelos Estados americanos com o objetivo de alcançar a paz e a justiça, promover a solidariedade e defender a soberania, a integridade territorial e a independência no hemisfério ocidental. O ideal de solidariedade americano teve sua primeira expressão no Congresso do Panamá, em 1826. No entanto, apenas em 1980 ocorreu a Primeira Conferência Internacional dos Estados Americanos, em Washington.

Contudo, somente na IX Conferência Internacional dos Estados Americanos, sediada em Bogotá, em 1948, foi adotada a Carta da Organização dos Estados Americanos, a qual foi emendada posteriormente pelo Protocolo de Buenos Aires, em 1967, e pelo Protocolo de Cartagena das Índias, em 1985.

Dentre os princípios mais relevantes que regem essa organização estão: a democracia, os direitos fundamentais individuais, a paz, a não intervenção, a solução pacífica de controvérsias, a ação comum em caso de agressão e a promoção cooperativa do desenvolvimento econômico, social e cultural. A Carta da OEA também contém normas sociais e econômicas e regras para o desenvolvimento da educação, ciência e cultura.

A Organização dos Estados Americanos é composta por uma série de órgãos, sendo os principais, do ponto de vista do presente artigo, a Assembléia Geral, órgão supremo que decide sobre as ações e políticas da organização; a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, cuja principal função é a de proteger e promover a observância dos direitos humanos; e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual não é propriamente um órgão da OEA, mas sim uma instituição autônoma, cujo propósito é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Ainda durante a IX Conferência Internacional dos Estados Americanos, foi adotada a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a qual representou o primeiro passo para o estabelecimento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, como expresso no parágrafo final de suas cláusulas introdutórias:

“Que a consagração americana dos direitos essenciais do homem unida às garantias oferecidas pelo regime interno dos Estados, estabelece o sistema inicial de proteção que os Estados Americanos consideram adequado às atuais circunstâncias sociais e jurídicas, não deixando de reconhecer, porém, que deverão fortalecê-lo cada vez mais no terreno internacional, à medida que essas circunstâncias se tornem mais propícias”.

Após a adoção da Declaração Americana, mas antes do estabelecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a X Conferência Internacional dos Estados Americanos (Caracas, 1954) deu contribuições essenciais para a efetiva implementação do Sistema Interamericano de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos. Entre as principais contribuições dessa Conferência estão a Declaração de Caracas, na qual foi afirmada “a convicção dos Estados Americanos de que o meio mais eficaz de fortalecer as instituições democráticas é aumentar o respeito aos direitos individuais e sociais do homem”, e a resolução pelo “Fortalecimento do Sistema Interamericano de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos”, cuja importância foi o estabelecimento do primeiro programa de ação pela promoção desses direitos.

A estrutura institucional do Sistema Interamericano de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos era, até então, baseada apenas em instrumentos de natureza declaratória¹⁷, afinal a Declaração Americana é uma resolução cuja força jurídica baseia-se apenas no costume. Em 1969, foi assinada a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José), a qual entrou em vigor apenas em 18 de julho de 1978. Essa Convenção não apenas fortaleceu o Sistema Interamericano ao criar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ao tornar os mecanismos interamericanos mais efetivos, como também marcou a evolução desse Sistema ao transformar a natureza declaratória dos instrumentos que o compõem em instrumentos de natureza jurídica, com força obrigatória.

Essa Convenção define os direitos e liberdades protegidos, concentrando-se, principalmente, nos direitos civis e políticos. Com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, os Estados americanos apenas afirmaram que:

¹⁷ A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem é uma resolução da OEAe, por isso, não tem efeito vinculante.

“Os Estados Partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes na Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis por via legislativa ou por outros meios apropriados”¹⁸.

A consolidação de uma base jurídica e o fortalecimento dos instrumentos criados para supervisionar o cumprimento das obrigações assumidas pelos Estados têm sido propulsores da evolução do Sistema Interamericano de Proteção e Promoção dos Direitos Humanos. Contudo, como resultado de delicadas negociações, houve uma lenta aceitação do incremento de prerrogativas dos mecanismos de supervisão desse Sistema. Esse processo foi igualmente influenciado por mudanças na conjuntura política mundial, como o fim da Guerra Fria, e nas situações nacionais nos Estados membros da OEA¹⁹.

2.1 A Comissão Interamericana de Direitos Humanos

O XV Encontro Consultivo de Ministros das Relações Exteriores dos Estados Americanos (Santiago, 1959) adotou importantes resoluções para o desenvolvimento e fortalecimento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, como a Declaração de Santiago, na qual os Ministros acordaram que a “harmonia entre as repúblicas americanas só poderá ser efetiva se os direitos humanos e as liberdades fundamentais e o exercício da democracia representativa tornar-se realidade em cada uma delas”²⁰ e declararam que “os governos dos Estados Americanos devem manter o sistema de liberdade individual e de justiça social baseado no respeito pelos direitos humanos fundamentais”²¹.

¹⁸ Artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos

¹⁹ BRANDÃO, M.A.D. e BELLI, B. *O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos e seu Aperfeiçoamento no Limiar do Século XXI*. mimeo. p. 2-3. (texto apresentado no Seminário Direitos no Limiar do Século XXI, Rio de Janeiro, 10 e 11 de setembro de 1998)

²⁰ Declaração de Santiago

²¹ *Idem*

Na segunda parte de sua resolução, o XV Encontro Consultivo criou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), a qual solucionou o problema que os Estados americanos estavam enfrentando: a ausência de um órgão especificamente responsável pela observância dos direitos humanos.

O Conselho da Organização aprovou o primeiro Estatuto da Comissão em 25 de maio de 1960. Segundo o Estatuto, a Comissão Interamericana é composta por sete membros eleitos individualmente pelo Conselho da Organização. A Comissão tinha como função exclusiva a promoção dos direitos humanos, ou seja, ele deveria propiciar as condições necessárias para o pleno exercício desses direitos.

Em 1965, na II Conferência Interamericana Extraordinária, sediada no Rio de Janeiro, as funções da Comissão Interamericana foram ampliadas. Suas faculdades passaram a ser as de um verdadeiro órgão de controle com autoridade para receber e examinar petições individuais, solicitar informações aos Estados e formular recomendações. Portanto, a resolução da Conferência em questão acrescentou à função de promoção a função de proteção aos direitos humanos no Continente.

No entanto, as novas funções foram estatuídas por uma resolução e, portanto, não tinham força obrigatória. Com a adoção do Protocolo de Buenos Aires, o qual emendou a Carta da OEA, em 1967, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos passou a ser dotada de obrigação jurídica, tendo em vista o fato de que a Comissão foi incorporada à Carta da Organização dos Estados Americanos. Com isso, ela passou a ter *status* de principal órgão da OEA.

As funções da Comissão foram mais bem definidas com a adoção, em 1969, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José), a qual entrou em vigor em 1978. A Comissão Interamericana, como órgão de supervisão, passou a utilizar os seguintes métodos de implementação dos instrumentos interamericanos: mecanismos de petições, de relatórios e de determinação de fatos ou investigações²².

²² A CIDH atua junto a qualquer Estado membro da OEA e sua atuação depende do esgotamento dos recursos internos dos Estados.

“Grande parte do trabalho da CIDH consiste na tramitação de petições sobre denúncias de violações dos direitos humanos consagrados na Convenção Americana de Direitos Humanos ou na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. A tramitação segue um modelo quase judicial, contemplando réplicas, trélicas e audiências. Caso não seja possível alcançar uma solução amigável, e terminada a tramitação regular, o caso é encerrado e inicia-se a fase de elaboração do relatório, que poderá declarar o Estado responsável por violações de direitos humanos no que tange ao caso específico examinado”²³.

O atual Estatuto da Comissão foi aprovado no IX Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA (La Paz, Bolívia, 1979). Seu artigo 1º. define a Comissão como “um órgão da Organização dos Estados Americanos criado para promover a observância e a defesa dos direitos humanos e para servir como órgão consultivo da Organização nesta matéria”. Este Estatuto reflete as importantes inovações que a Convenção Americana introduziu no que diz respeito à Comissão.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em seu CIX Período Extraordinário de Sessões, realizado em dezembro de 2000, aprovou seu novo Regulamento, que entrou em vigor em 1º de maio de 2001.

2.2 A Corte Interamericana de Direitos Humanos

A idéia de criar uma Corte para proteger os Direitos Humanos nas Américas surgiu há muito tempo. A IX Conferência Internacional dos Estados Americanos (Bogotá, 1948) aprovou a Resolução XXXI, denominada “Corte Interamericana para proteger os direitos do homem”, na qual considerou que a proteção desses direitos “deve ser garantida por um órgão jurídico, visto como não há direito devidamente garantido sem o amparo de um tribunal competente” e que, “em se tratando de direitos internacionalmente reconhecidos, a proteção jurídica, para ser eficaz, deve emanar de um órgão internacional”. Conseqüentemente, encarregou a Comissão Jurídica Interamericana de elaborar um projeto de estatuto para a criação de

²³ BRANDÃO, M.A.D. e BELLI, B. *op cit.* p. 11-12.

uma Corte Interamericana destinada a garantir os direitos humanos²⁴.

O projeto de estatuto da Corte elaborado pelo Conselho de Jurisconsultos foi submetido à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a outros órgãos e entidades convenientes para considerações. A Comissão apresentou seu parecer ao Conselho em 10 de abril de 1967. Em 22 de novembro de 1969, em São José da Costa Rica, foi aprovada a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mediante a qual foi criada a Corte Interamericana de Direitos Humanos²⁵.

A Assembléia Geral realizada em La Paz, Bolívia, em 1979, aprovou o primeiro Estatuto da Corte. O artigo 1º. do Estatuto define-a como “uma instituição judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos”.

A Corte Interamericana aprovou o seu primeiro Regulamento em julho de 1980 e ante a necessidade de agilizar os procedimentos, a Corte aprovou mais três regulamentos (1991, 1996, e 2000). As principais modificações que esses regulamentos implementaram foram: a concessão do direito, aos representantes das vítimas ou de seus familiares, de apresentar de forma independente seus próprios argumentos e provas na etapa de reparações e a introdução de “uma série de medidas destinadas a permitir às supostas vítimas, seus familiares ou representantes devidamente credenciados a participação direta (*locus standi in judicio*) em todas as etapas do processo iniciado mediante a apresentação de uma demanda ao Tribunal”²⁶.

A Corte possui as funções consultiva e contenciosa. No que se refere à função contenciosa, somente a Comissão e os Estados partes que houverem reconhecido a competência da Corte estão autorizados a submeter à sua decisão um caso relativo à interpretação ou aplicação da Convenção, desde que todos os procedimentos da Comissão tenham sido esgotados. Além disso, para que possa ser

²⁴ Documentos Básicos em Matéria de Direitos Humanos no Sistema Interamericano. Washington: Secretaria Geral da OEA, 1997.

²⁵ Parte II, Capítulo VII da Convenção Americana de Direitos Humanos.

²⁶ Disponível em: www.oas.org, novembro de 2002.

submetido um caso baseado em denúncia interposta contra um Estado parte, esse deve reconhecer a competência da Corte²⁷.

“A Corte é uma instância judicial por decisão dos Estados parte da Convenção Americana, a que os Estados aderem por ato volitivo. Não pode, conseqüentemente, ser encarada como imposição externa. Suas sentenças tampouco violam ou interferem nas soberanias nacionais”²⁸.

Ela é composta por sete juizes eleitos a título pessoal e, cabe ressaltar, que suas sentenças têm um caráter reparativo, e não punitivo. Ademais, suas sentenças são obrigatórias e inapeláveis.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos não é um tribunal penal e não substitui ações relativas às violações cometidas nos Estados. Ela apenas julga se o Estado é ou não responsável por violações à Convenção Americana de Direitos Humanos. Quando o Estado é considerado responsável, a conseqüência é a obrigação de fazer cessar a violação e indenizar as vítimas e seus herdeiros legais²⁹.

“A decisão da Corte tem força jurídica vinculante e obrigatória, cabendo ao Estado seu imediato cumprimento”³⁰. No entanto, não há, no Sistema, um mecanismo especial encarregado de verificar a execução das sentenças da Corte.

No tocante à sua função consultiva, qualquer Estado membro da OEA poderá consultar a Corte sobre a interpretação da Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. A Corte também poderá, por solicitação do Estado membro, emitir opinião sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os instrumentos internacionais acima mencionados³¹.

²⁷ Documentos Básicos em Matéria de Direitos Humanos no Sistema Interamericano. Washington: Secretaria Geral da OEA, 1997.

²⁸ ALVES, J. A. L. *A Arquitetura Internacional dos Direitos Humanos*. São Paulo: FTD, 1997. p. 283.

²⁹ BRANDÃO, M.A.D. e BELLI, B. *op.cit.* p. 16.

³⁰ PIOVESAN, F. *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*. São Paulo: Max Linomard, 1996. p. 237

³¹ Documentos Básicos em Matéria de Direitos Humanos no Sistema Interamericano. Washington: Secretaria Geral da OEA, 1997.

2.3 Os instrumentos interamericanos de direitos humanos³²

A antiga aspiração expressa no México, em 1945, de precisar os Direitos Humanos em uma declaração dotada de força jurídica obrigatória, tornou-se realidade em São José da Costa Rica, em 1969, quando foi adotada a Convenção Americana de Direitos Humanos. Essa Convenção, ao entrar em vigor em 18 de Julho de 1978, não somente fortaleceu o sistema ao dar maior efetividade à Comissão Interamericana e aos mecanismos interamericanos de proteção e promoção dos direitos humanos, mas também marcou a evolução do sistema ao modificar a natureza jurídica dos instrumentos em que se baseia sua estrutura institucional.

A Convenção, nos termos do primeiro parágrafo do Preâmbulo, tem como propósito “consolidar neste Continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito aos direitos essenciais do Homem”.

Em sua primeira parte, a Convenção estabelece os deveres dos Estados e os direitos protegidos, com forte ênfase nos direitos civis e políticos, referindo-se aos direitos econômicos, sociais e culturais apenas em seu Capítulo III, artigo 26, como anteriormente mencionado. Na segunda parte, ela estabelece os meios de proteção do sistema: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que declara serem os órgãos competentes “para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados Parte nesta Convenção”.

Em cumprimento ao artigo 26 da Convenção Americana, que expressa o comprometimento dos Estados em adotar medidas para a implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais, a Assembléia Geral da OEA, durante o seu XVIII Período Ordinário de Sessões (1988), com base nos documentos de trabalho preparados pela Comissão, abriu à assinatura o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de

³² As informações desse item foram extraídas de: Documentos Básicos em Matéria de Direitos Humanos no Sistema Interamericano. Washington: Secretaria Geral da OEA, 1997.

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador). Em seu Preâmbulo, os Estados parte da Convenção Americana reconhecem a estreita relação existente entre os dois grupos de direitos, “porquanto as diferentes categorias de direitos constituem um todo indissolúvel que encontra sua base no reconhecimento da dignidade da pessoa humana (...)”.

Os Estados partes recordam igualmente que “só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento de temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, tanto como de seus direitos civis e políticos”³³.

Ao ratificar o Protocolo, os Estados parte “se comprometem a adotar as medidas necessárias (...) até o máximo dos recursos disponíveis e levando em conta o seu grau de desenvolvimento, a fim de conseguir, progressivamente, e de acordo com a legislação interna, a plena efetividade dos direitos reconhecidos neste Protocolo”³⁴, o qual se refere ao direito à saúde, a um meio ambiente sadio, à alimentação, à educação, aos benefícios da cultura, ao direito à família e aos direitos da criança, do idoso e do deficiente.

Outros importantes instrumentos interamericanos de proteção dos direitos humanos são: o Protocolo à Convenção Americana referente à Abolição da Pena de Morte, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir Tortura, a Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

3. Evolução da indivisibilidade no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos

A Organização dos Estados Americanos é composta por trinta e cinco (35) Estados membros, sendo que apenas vinte e quatro (24) deles ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos³⁵ e,

³³ Preâmbulo do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

³⁴ Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, art. 1º.

³⁵ Interessante notar que Estados Unidos e Canadá, os países mais desenvolvidos do Continente, não ratificaram essa Convenção.

portanto, fazem parte do Sistema Interamericano de Proteção e Promoção dos Direitos Humanos³⁶.

Como anteriormente mencionado, a Convenção Americana de Direitos Humanos deu ampla ênfase aos direitos civis e políticos. Em seu artigo 26, o único que trata dos direitos econômicos, sociais e culturais, os Estados partes “adiam” a proteção desses direitos ao fazerem referência ao seu comprometimento em adotar medidas futuras, tanto no âmbito interno, quanto no âmbito internacional, para implementação desses direitos.

A Convenção Americana foi assinada em 1969, período marcado por profunda disputa ideológica entre países capitalistas e socialistas (Guerra Fria). Tendo em vista o fato de que os países capitalistas defendiam a primazia dos direitos civis e políticos e de que o continente americano tinha uma ampla maioria de países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, é possível apreender o significado da ênfase dada aos direitos civis e políticos na Convenção Americana.

Alguns fatores podem ser destacados como propulsores da mudança no tratamento dos direitos econômicos, sociais e culturais e o conseqüente reconhecimento da importância da indivisibilidade dos direitos humanos no Sistema Interamericano. A Conferência de Teerã, em 1978, marcou o primeiro passo para o fim da primazia então existente dos direitos civis e políticos, ao declarar os direitos humanos como um todo interrelacionado e indivisível.

Outro fator importante a ser mencionado, agora na esfera regional, foi o fim das ditaduras na América Latina e o restabelecimento da democracia no Continente. Na década de 80, começou a queda das ditaduras militares latino-americanas e, com isso, houve o restabelecimento da democracia nas Américas. Como fruto da reunião da Assembléia Geral da OEA de 1990, em Assunção, Paraguai, a Declaração firmada nessa cidade enfatizou a democracia representativa como o sistema político que mais adequadamente garante os fins e os propósitos da OEA, inclusive no que diz respeito aos direitos humanos³⁷.

³⁶ Apenas 20 países aceitaram a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

³⁷ TRINDADE, A. A. C. Democracia y Derechos Humanos: El Régimen Emergente de la Promoción Internacional de la Democracia y del Estado de Derecho. In: *Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos*. Ano I, vol. 1, Número 1 - 1999. p. 14

Segundo Flávia Piovesan, “no caso latino-americano, o processo de democratização na região, deflagrado na década de 80, é que propiciou a incorporação de importantes instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos pelos Estados latino-americanos. A título de exemplo, note-se que a Convenção Americana de Direitos Humanos, também denominada Pacto de São José da Costa Rica, adotada em 1969, foi ratificada pela Argentina em 1984, pelo Uruguai em 1985, pelo Paraguai em 1989 e pelo Brasil em 1992”³⁸.

Além disso, a Conferência de Viena de 1993, além de consagrar a indivisibilidade dos direitos humanos, afirmou a forte ligação entre democracia e esses direitos, ao afirmar categoricamente que a democracia, o desenvolvimento e os direitos humanos são interdependentes e se reforçam mutuamente.

Como resultado da influência do fim da Guerra Fria, das duas Conferências Mundiais de Direitos Humanos (Teerã e Viena) e do restabelecimento das democracias na América Latina, os Estados americanos passaram a dedicar maior atenção à necessidade de assegurar os direitos humanos como um todo indivisível e indissolúvel. Afinal, não mais existia a concepção da primazia dos direitos civis e políticos aceita, à época da Guerra Fria, pelos países capitalistas, predominantes no Continente. Além disso, houve uma plena aceitação de que a consolidação da democracia requer programas de estímulo, para seu desenvolvimento, dirigidos à erradicação da pobreza extrema e à satisfação das necessidades básicas de alimentação, saúde, educação, moradia e emprego produtivo³⁹.

Como consequência, os países americanos assinaram, em 17 de novembro de 1988, o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador).

Além disso, o baixo índice de desenvolvimento humano da maioria dos países do Sistema Interamericano nos leva a questionar

³⁸ PIOVESAN, F. *O sistema interamericano de promoção e proteção dos direitos humanos: O futuro do sistema*. Palestra proferida em 12 de junho de 2000 no Seminário: O Sistema Interamericano de Proteção e Promoção dos Direitos Humanos.

³⁹ TRINDADE, A. A. C. Democracia y Derechos Humanos: El Régimen Emergente de la Promoción Internacional de la Democracia y del Estado de Derecho. In: *Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos*. Ano I, vol. 1, Número 1 - 1999., p. 15

a relação desse fato com a maior preocupação dos Estados em garantir a proteção internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais, tendo em vista que o desenvolvimento desses países só poderá ser alcançado com a realização plena dos direitos humanos como um todo.

As desigualdades sócio-econômicas e a pobreza constituem uma ameaça para o desenvolvimento e para a consolidação da democracia no Continente Americano. Ademais, é importante notar que, dos vinte e quatro (24) Estados partes do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, apenas cinco apresentam, hoje, um alto índice de desenvolvimento humano⁴⁰.

Diante dos argumentos apresentados, pode-se deduzir que a assinatura do Protocolo de São Salvador demonstra a vontade dos Estados americanos em mudar sua situação sócio-econômica com a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais.

Como afirma Antônio Augusto Cançado Trindade:

“De que vale o direito à vida sem o provimento de condições mínimas de uma existência digna, se não de sobrevivência (alimentação, moradia, vestuário)? (...) E os exemplos se multiplicam. Daí a importância da visão holística ou integral dos direitos humanos, tomados todos conjuntamente. Todos experimentamos a indivisibilidade dos direitos humanos no cotidiano de nossas vidas. Todos os direitos humanos para todos, é este o único caminho seguro para a atuação lúdica no campo da proteção dos direitos humanos. Voltar as atenções igualmente aos direitos econômicos, sociais e culturais, face à diversificação das fontes de violações dos direitos humanos, é o que recomenda a

⁴⁰ Dados obtidos por meio do relatório “Human Developmente Indicators” 2002 do PNUD. Os países membros do Sistema Interamericano que apresentam alto índice de desenvolvimento humano com sua respectiva posição ranking mundial são: Barbados (31^o), Argentina (34^o), Chile (38^o), Uruguai (40^o), Costa Rica (43^o) e Trinidad e Tobago (50^o). Os países com médio IDH são: México (54^o), Panamá (57^o), Dominica (61^o), Colômbia (68^o), Venezuela (69^o), Brasil (73^o), Suriname (74^o), Peru (82^o), Granada (83^o), Paraguai (90^o), Equador (93^o), República Dominicana (94^o), El Salvador (104^o), Bolívia (114^o), Honduras (116^o), Nicarágua (118^o) e Guatemala (120^o). O único país do Sistema com baixo IDH é o Haiti, que está na 146^o. posição no ranking mundial.

concepção, de aceitação universal em nossos dias, da interrelação ou indivisibilidade de todos os direitos humanos”⁴¹.

3.1 A evolução da indivisibilidade na prática do sistema interamericano

A evolução da prática da indivisibilidade dos direitos humanos no Sistema Interamericano pode ser demonstrada de algumas formas. A primeira, pelos casos apresentados ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, como demonstram os exemplos apresentados no item seguinte. A segunda, pela entrada em vigor do Protocolo de São Salvador.

3.1.1 A prática no sistema interamericano de direitos humanos

Nos últimos dez anos, grandes mudanças têm ocorrido no que diz respeito ao tratamento dispensado aos direitos econômicos, sociais e culturais, o que significa uma maior preocupação com os direitos humanos como um todo no Sistema Interamericano. É possível constatar essa mudança, por exemplo, com a análise dos casos da Comissão (CIDH) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

A CIDH, desde o final da década de 1970, vem analisando a situação dos direitos econômicos, sociais e culturais em seus relatórios. Assim, foi incluído um capítulo sobre esses direitos nos relatórios de países como El Salvador e Haiti. Contudo, somente em 1993, a CIDH definiu em seu relatório anual a importância da adoção de medidas específicas para proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais pelos Estados membros. A partir de então, a “Comissão passou a realizar atividades de acompanhamento da situação desses direitos nos diversos países da região de forma sistemática, durante suas visitas *in loco* e em seus relatórios sobre países específicos”⁴².

⁴¹ Palestra do Prof. Cançado Trindade na IV Conferência Nacional de Direitos Humanos.

⁴² FERREIRA, P. G. “O litígio de casos individuais dos DESC no Sistema Interamericano de Direitos Humanos.” In: *Revista Proposta* Ano 31, Março/Maio de 2002, no. 92. p. 60

De uma maneira controversa, contudo, o Protocolo de São Salvador limitou a possibilidade de litígios de casos concretos de direitos econômicos, sociais e culturais no Sistema. De acordo com o artigo 19, as vítimas só podem apresentar petições individuais alegando violações aos seus direitos à educação e à liberdade sindical.

Apesar disso, uma boa parte dos casos, embora apresentem uma violação de algum direito civil ou político, são na verdade casos de violação sistemática de direitos econômicos, sociais e culturais.

O primeiro caso de direitos econômicos, sociais e culturais decidido pela CIDH foi o do povo Yanomami contra o Brasil decidido em 1984. Nesse caso, o Brasil foi responsabilizado pela violação de direitos como o direito à vida, à liberdade, à saúde e ao bem estar daquele povo.

Recentemente, trinta cinco (35) portadores do vírus HIV, apresentaram denúncia contra o Chile por violação dos direitos à vida e à saúde baseada na falta de proteção judicial para tais direitos, uma vez que os portadores desse vírus tiveram seu direito ao acesso a um tratamento gratuito negado pela Corte Suprema do Chile.

Essa mudança manifesta-se de várias formas também na Corte Interamericana. Na principal delas, os direitos que motivaram a demanda do caso referiam-se apenas ao grupo dos direitos civis e políticos, mas a vítima teve, também, seus direitos econômicos, sociais e culturais assegurados por meio de sentença. Cabe ressaltar, no entanto, que a imensa maioria dos casos denunciados na Corte Interamericana ainda se referem apenas aos direitos civis e políticos da vítima. Quatro casos da Corte Interamericana podem demonstrar, como exemplo, a evolução da indivisibilidade dos direitos humanos na prática do Sistema Interamericano.

O caso “Aloeboetoe y otros” foi denunciado, em 27 de agosto de 1990, pela CIDH contra o Estado de Suriname. Os fatos que motivaram a demanda foram a detenção, o tratamento cruel, desumano e degradante e a morte de Daison Aloeboetoe, Dedemanu Aloeboetoe, Mikuwendje Aloeboetoe, John Amoida, Richenel Voola, Martin Indisie Banai y Beri Tiopo.

Esses fatos correspondem à violação da obrigação do Estado de respeitar os direitos, do dever do Estado de adotar disposições de

direito interno, do direito à vida, do direito à integridade pessoal, do direito à liberdade pessoal e à proteção judicial; todos direitos civis e políticos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. No caso em questão, o Estado de Suriname reconheceu sua responsabilidade perante a Corte.

Apesar das violações supracitadas corresponderem apenas a direitos civis e políticos, a Corte Interamericana, em sua sentença de 10 de setembro de 1993, decidiu por unanimidade estabelecer, além de uma indenização aos familiares das vítimas, a criação de uma fundação responsável por administrar os fundos dessas indenizações, para que seja assegurado aos beneficiários, especialmente aos menores, uma boa aplicação das reparações recebidas. Apesar da assessoria prestada pela fundação, a Corte afirma que os responsáveis pelos beneficiários menores não ficam desobrigados de assisti-los com educação, alimento, vestuário e assistência médica.

Além disso, tendo em vista o fato de que a comunidade a qual sofreu as violações anteriormente citadas tem uma cultura de poligamia, prática não prevista na Convenção Americana, a Corte decidiu, com base na prática cultural, indenizar também todas as viúvas. Esse fato reforça a tese de proteção aos direitos culturais dessa comunidade.

Dessa maneira, a Corte garante esses direitos de forma plena aos beneficiários das vítimas das violações causadas pelo Estado de Suriname. Ademais, na sentença da Corte está prevista, a título de reparação, a reabertura da escola situada em Gujada, a qual deve ser dotada de pessoal docente e administrativo para que funcione permanentemente. Essa escola possui um forte significado cultural para a comunidade étnica à qual pertenciam as pessoas afetadas pelas violações supracitadas.

Outro caso bastante relevante para percepção da evolução do tratamento dos direitos econômicos, sociais e culturais no Sistema Interamericano, é o caso “Villagrán Morales y otros”. Esse caso foi demandado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 30 de janeiro de 1997, contra o Estado da Guatemala. Os fatos que motivaram a demanda aconteceram a partir de junho de 1990, quando, segundo a mesma, teria ocorrido o seqüestro, tortura e morte, por parte de agentes do Estado, dos menores Astrau Villagrán Morales, Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente

Figuroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval e Jovito Josué Juárez Cifuentes.

Esses fatos correspondem à violação da obrigação do Estado de respeitar os direitos, do direito à vida, do direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, do direito à integridade pessoal, do direito à liberdade pessoal, das garantias judiciais, da proteção judicial, dos direitos da criança e dos artigos 1º., 6º. e 8º. da Convenção Interamericana para Prevenir e Sancionar a Tortura.

No caso em questão, os menores que sofreram as violações eram “meninos de rua” que não tinham nenhuma das condições mínimas de vida (saúde, educação, moradia...) asseguradas pelo Estado. Esse caso é bastante rico no que diz respeito à prática da proteção aos direitos humanos como um todo.

Na sentença de 11 de setembro de 1997, aprovada pela Corte por unanimidade, o Juiz Antônio Augusto Cançado Trindade, em seu voto razoado⁴³ inseriu a discussão a respeito do direito à vida “como um todo”, não só como direito a viver, mas sim como direito a viver com dignidade. Além disso, a referida sentença também acrescentou à jurisprudência da Corte uma ampliação ao conceito de vitimização. No caso em questão, o fato dos meninos de rua terem sido torturados e mutilados dificultou o reconhecimento dos corpos por suas mães. Esse fato levou a Corte a decidir que as mães dos meninos assassinados também tiveram seus direitos violados, determinando, assim, que as mães foram vítimas secundárias das violações sofridas.

Em algumas decisões recentes da Corte, como no caso “Villagrán Morales y otros”, o direito à vida não se limita à proteção da pessoa contra a privação arbitrária da vida, mas sim, à extensão desse direito ao respeito integral da vida, incluindo o direito a uma vida digna e o direito a um “projeto de vida”⁴⁴.

Ademais, cabe apresentar o caso “Baena Ricardo y otros”, o qual foi apresentado à Corte pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 16 de janeiro de 1998. Os fatos que motivaram a demanda foram a suposta violação, por parte do Estado do Panamá,

⁴³ Voto razoado é aquele no qual o juiz apresenta explicações a respeito de seu voto. Geralmente, o juiz acrescenta questões que acredita serem pertinentes ao andamento do caso.

⁴⁴ V. sentença da Corte Interamericana sobre o caso “Loayza Tamaio”.

dos artigos 8^o (garantias judiciais), 9^o (Princípio de Legalidade e de Retroatividade), 10^o (direito à indenização), 15 (direito de reunião), 16 (liberdade de Associação) e 25 (proteção judicial) da Convenção Americana em relação aos artigos 1^o e 2^o da mesma.

Como resultado dos fatos, ocorridos a partir de 6 de dezembro de 1990, às custas dos quais foram destituídos, de forma supostamente arbitrária, 270 funcionários públicos que haviam participado de uma manifestação por questões trabalhistas, foi instaurado processo ulterior, no qual se argumentou a violação dos direitos ao devido processo e à proteção judicial.

Na demanda, a Comissão também solicita que a Corte declare “que la ley 25 y la norma contenida en el artículo 43 de la Constitución Política de Panamá [...] son contrarias a la Convención Americana y por ende deben ser modificadas o derogadas de conformidad con el artículo 2 de la Convención”; que o Panamá também violou os artigos 33 e 50.2 da Convenção e que ele deve restabelecer aos trabalhadores destituídos o exercício de seus direitos e reparar e indenizar as vítimas.

Nesse exemplo, é interessante notar a inserção de direitos econômicos, sociais e culturais na própria demanda feita pela Comissão Interamericana. A solicitação de consideração de questões trabalhistas, como o direito à greve, marca uma ruptura com as demandas tradicionalmente apresentadas pela Comissão, que só tratavam de violações a direitos civis e políticos.

Por fim, acrescenta-se o caso Cantoral Benavides, que vem confirmar a sólida construção jurisprudencial da Corte Interamericana de um novo conceito de direito à vida que incorpora aspectos necessários a uma vida com dignidade, sempre relacionado à realização plena da pessoa humana.

O presente caso foi submetido à Corte pela Comissão Interamericana em 8 de agosto de 1996. A sentença do mérito data de 18 de agosto de 2000. Nela, a Corte decidiu que o Estado do Peru violou os artigos 1, 2, 5, 7, 8 e 9 da convenção Americana, que correspondem basicamente, à prisão arbitrária, tortura e tratamento cruel, desumano e degradante de Luiz Alberto Cantoral Benavides. No momento de sua detenção, a vítima tinha vinte (20) anos e realizava estudos de biologia na Universidade Nacional de São Marcos no Peru. Ele ficou encarcerado por quatro anos sendo

libertado em 1997, quando abandonou o Peru por temer por sua segurança. Desde 1998, vive no Brasil.

A Corte, em sentença de reparações do dia 3 de dezembro de 2001, decidiu que o projeto de vida de Luiz Alberto foi destruído e que, portanto, o Estado deveria repará-lo. Os transtornos que os fatos lhe impuseram impediram-no de realizar a sua vocação, em particular no que diz respeito à sua formação e ao seu trabalho profissional. Tudo isso representou um sério dano ao seu projeto de vida.

3.1.2 A consagração da indivisibilidade no sistema interamericano: O Protocolo de São Salvador

O Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, “Protocolo de São Salvador”, com o “propósito de consolidar neste Continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do homem”, afirma que: “embora os direitos econômicos, sociais e culturais fundamentais tenham sido reconhecidos em instrumentos internacionais anteriores, tanto no âmbito universal como regional, é muito importante que esses direitos sejam reafirmados, desenvolvidos, aperfeiçoados e protegidos, a fim de consolidar na América, com base no respeito pleno dos direitos da pessoa, o regime democrático representativo de governo, bem como o direito de seus povos ao desenvolvimento, à livre determinação e a dispor livremente de suas riquezas e recursos naturais”⁴⁵.

Como visto, face às mudanças nos cenários internacional – fim da Guerra Fria e influência das Conferências Mundiais de Direitos Humanos – e interno – restabelecimento das democracias – tendo como um de seus propósitos promover o desenvolvimento no Continente americano, o Protocolo de São Salvador entrou em vigor em 16 de novembro de 1999, quando completou o número de doze (12) ratificações⁴⁶, número necessário para o início de sua vigência.

⁴⁵ Preâmbulo do Protocolo de São Salvador.

⁴⁶ Os países que ratificaram o Protocolo de São Salvador foram: Brasil (21/08/96), Colômbia (23/12/97), Costa Rica (16/11/99), Equador (25/03/93), El Salvador (06/06/95), México (16/04/96), Panamá (18/02/93), Paraguai (03/06/97), Peru (04/06/95), Suriname (10/07/90), Uruguai (02/04/96) e Guatemala (05/30/00).

Tendo em vista que a Convenção Americana de Direitos Humanos já assegurava os direitos civis e políticos, a vigência do Protocolo de São Salvador, o qual se refere aos direitos econômicos, sociais e culturais, é o maior indicador da evolução da indivisibilidade dos direitos humanos no Sistema Interamericano.

4. O direito à educação no sistema interamericano

Como visto anteriormente, o direito à educação, como parte do núcleo dos direitos econômicos, sociais e culturais, foi negligenciado por vários Estados frente às dificuldades decorrentes dos acontecimentos históricos que marcaram a fase legislativa dos direitos humanos.

No entanto, com a redemocratização da América Latina, grande parte desses Estados passou a investir de uma maneira significativa na promoção e proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais. Especificamente, no tocante ao direito à educação, a grande maioria aumentou as despesas com educação entre 1985 e 2000, além disso as taxas de alfabetização também cresceram no Continente. A taxa de alfabetização de jovens, por exemplo, cresceu de 90,8% em 1985 para 94,0% em 2000⁴⁷.

Contudo, ainda são muitas as dificuldades para a garantia plena deste direito. Grandes obstáculos para sua exigibilidade continuam a existir. Um deles é a falta de mecanismos apropriados para sua tutela, ou seja, as ações judiciais tipificadas pelo ordenamento jurídico – interno ou internacional – foram pensadas para a proteção dos direitos civis e políticos. Outro importante obstáculo é “a ausência de tradição e exigência por mecanismos judiciais”⁴⁸.

Uma das formas de superação destes obstáculos ocorre pelo uso das prerrogativas previstas no Protocolo de São Salvador, o qual prevê a possibilidade de apresentação de denúncias de violação ao direito à educação perante os órgãos do Sistema Interamericano.

Entretanto, atualmente, apenas poucos casos apresentados referem-se à proteção específica deste direito.

⁴⁷ PNUD. Relatório do desenvolvimento humano 2002. disponível em www.undp.org.br em Novembro de 2002. p. 178 - 185

⁴⁸ ABRAMOVICH, V. E. “Estratégias de litígios em direitos econômicos, sociais e culturais.” In: *Revista Proposta* Ano 31, Março/Maio de 2002, no. 92. p. 31

A CIDH, em um caso contra a República Dominicana, garantiu o direito à educação de duas meninas que tiveram negado o acesso à escola por questões relativas à nacionalidade. Essa Comissão acolheu o pedido de medida provisória⁴⁹ e determinou que o Estado dominicano matriculasse as meninas imediatamente.

Perante a Corte Interamericana, os casos *Aloeboetoe y otros* e *Cantoral Benavides* são ilustrativos da atuação desse órgão na proteção ao direito à educação. No primeiro, como visto, a Corte decidiu pela reabertura de uma escola que deve ser provida de todas as condições para um ensino de qualidade. No segundo caso, Luiz Alberto Cantoral Benavides, que era estudante universitário no momento de sua prisão arbitrária, teve garantido seu direito à educação, pois a Corte decidiu que o governo peruano estaria obrigado a pagar, a título de indenização, uma bolsa de estudos universitários ao rapaz até a conclusão do curso de sua escolha.

Note-se, todavia, que ambos casos supracitados foram motivados por denúncias de violação de direitos civis e políticos, e não especificamente pela violação ao direito à educação.

Conclusão

A Declaração Universal dos Direitos Humanos proclama os Direitos Humanos como um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade promovam o respeito a esses direitos e liberdades. Ademais, a Declaração Universal também proclama a unidade conceitual dos Direitos Humanos.

Todavia, os fatores políticos do período – marcado pelas disputas ideológicas da Guerra Fria – transformaram esse princípio de unidade em uma acentuada dicotomia entre os direitos civis e políticos e dos direitos econômicos, sociais e culturais. Isso ocorreu no momento em que a Comissão de Direitos Humanos foi encarregada de transformar o conteúdo dessa Declaração em um instrumento jurídico obrigatório e vinculante.

⁴⁹ Uma medida provisória pode ser requerida aos órgãos do Sistema Interamericano sempre que as vítimas demonstrarem perigo de dano iminente e irreparável a seus direitos. Esta não configura uma decisão sobre o mérito, mas apenas uma medida cautelar.

A adoção dos dois pactos de Direitos Humanos em 1966 no âmbito global foi acompanhada paralelamente na Organização dos Estados Americanos pela adoção da Convenção Americana de Direitos Humanos em 1969, que, devido aos mesmos fatores político-ideológicos acima citados, priorizou os direitos civis e políticos, fazendo apenas uma rápida referência a uma possível adoção futura de um instrumento que garantisse os direitos econômicos, sociais e culturais.

Como visto, com as mudanças que ocorreram no cenário internacional e no âmbito interno dos países do Continente, essa lacuna deixada pela Convenção Americana, no que diz respeito aos direitos econômicos, sociais e culturais, começou a ser preenchida.

Após o fim da Guerra Fria e da disputa ideológica Leste-Oeste, a divisão dos Direitos Humanos em dois grupos distintos passou a não mais fazer sentido. O primeiro passo dessa mudança de concepção foi a Conferência de Teerã, que proclamou a indivisibilidade dos Direitos Humanos e o final “teórico” da dicotomia desses direitos.

A redemocratização da América Latina na década de 80 causou grande impacto nesse processo de retomada da unidade conceitual dos Direitos Humanos. Isso devido ao fato de que o ideal de democracia é, reconhecidamente, vinculado ao ideal dos Direitos Humanos como um todo.

A consagração da necessidade de assegurar os Direitos Humanos de uma forma completamente inter-relacionada, ocorreu na Conferência de Viena, quando a indivisibilidade desses direitos foi consagrada como um princípio internacional, como um ideal a ser seguido por todos.

Cabe acrescentar que a situação interna dos países do Continente, que apresentam, em sua maioria, baixos índices de desenvolvimento, também contribuiu para as mudanças no processo de reconhecimento da importância dos direitos econômicos, sociais e culturais.

Especificamente no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a consagração da indivisibilidade vem sendo construída por meio da consolidação de uma base jurídica e pelo fortalecimento dos mecanismos que o compõem. A Corte Interamericana tem exercido um papel fundamental para o maior reconhecimento dos

direitos econômicos, sociais e culturais e a conseqüente consagração da indivisibilidade dos Direitos Humanos no Sistema Interamericano. Os casos apresentados, em especial o caso “Vilagrán Morales y otros”, demonstram que existe uma preocupação desse órgão com a garantia dos Direitos Humanos como um todo inter-relacionado e indivisível.

Por fim, é preciso perceber que todo o processo apresentado foi corroborado pela recente entrada em vigor do Protocolo de São Salvador. Esse tratado constitui um marco para a superação definitiva da primazia dos direitos civis e políticos e, conseqüentemente, para a consagração da indivisibilidade dos Direitos Humanos no Sistema Interamericano de Promoção e Proteção desses Direitos.

Dessa forma, pode-se concluir que houve um fortalecimento do princípio da indivisibilidade dos Direitos Humanos no Sistema Interamericano, uma vez que a proteção aos direitos econômicos, sociais e culturais tem aumentado, não só devido a ratificação do Protocolo de São Salvador, mas, principalmente, por sua incorporação na prática do Sistema.

Em decorrência do fortalecimento desse princípio fundamental à proteção dos direitos humanos, também é possível afirmar que foram muitos os avanços no que diz respeito ao direito à educação. Mostra-se claro o fato de que há uma tendência de garantia por parte do Sistema Interamericano, uma vez que, mesmo em casos de natureza civil e política, os órgãos do Sistema têm aprovado medidas no sentido da proteção integral do direito à educação.

A partir disso, depreende-se outra tendência de extrema importância: um gradual aumento de denúncias de violação do direito à educação, como prevê o Protocolo de São Salvador, já que o litígio internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais tem oferecido possibilidades concretas de apoio às vítimas.

Assim, conclui-se que a prática do Sistema Interamericano de Direitos Humanos aponta para uma efetiva garantia do direito à educação, bem como a todo o conjunto dos direitos humanos, sejam eles civis, políticos, econômicos, sociais ou culturais.

Bibliografía

- ABRAMOVICH, V. E. “Estratégias de litígios em direitos econômicos, sociais e culturais.” In: *Revista Proposta* Ano 31, Março/Maio de 2002, no. 92.
- ALMEIDA, F. B. *Teoria Geral dos Direitos Humanos*. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1996.
- ALVES, J. A. L. *A Arquitetura Internacional dos Direitos Humanos*. São Paulo: FTD, 1997.
- ARGÜELLO, A. M. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y su Jurisprudencia. In: *Curso de Derecho Internacional*. Washington: Comité Jurídico Interamericano, 1997. p. 129 - 151.
- BOBBIO, N. *A Era dos Direitos*. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
- BRANDÃO, M.A.D. e BELLI, B. *O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos e seu Aperfeiçoamento no Limiar do Século XXI*. mimeo. (texto apresentado no Seminário Direitos no Limiar do Século XXI, Rio de Janeiro, 10 e 11 de setembro de 1998).
- CARVALHO, J.M. *Os Direitos Humanos no Tempo e no Espaço*. Brasília: Ed. Brasília Jurídica, 1998.
- COMPARATO, F. K. Fundamento dos Direitos Humanos. In: MARCÍLIO, M. L. E PUSSOLI, L (coord.). *Cultura dos Direitos Humanos*. São Paulo: LTr, 1998. p. 53 - 77.
- DIAS, V.V. A CEPAL e os Direitos econômicos, Sociais e Culturais. In: TRINDADE, A. A. C. (editor) *A Incorporação das normas internacionais de proteção dos direitos humanos no direito brasileiro*. San José: IIDH, 1996 2 ed. p. 663 - 672
- Documentos Básicos em Matéria de Direitos Humanos no Sistema Interamericano. Washington: Secretaria Geral da OEA, 1997.
- EIDE, A. e ROSAS, A. Economic, Social and Cultural Rights: A Universal Challenge. In: EIDE, A., KRAUSE, C. e ROSAS, A. (editors) *Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook*. Dordrecht: Martinus Nyhoff Publishers, 1995. p. 15 - 19.
- EIDE, A. Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights. In: EIDE, A., KRAUSE, C. e ROSAS, A. (editors) *Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook*. Dordrecht: Martinus Nyhoff Publishers, 1995. p. 21 - 40.

FERREIRA, P. G. “O litígio de casos individuais dos DESC no Sistema Interamericano de Direitos Humanos.” In: *Revista Proposta* Ano 31, Março/Maio de 2002, no. 92.

FIAN – FoodFirst Information & Action Network. *Economic Human Rights – Their Time Has Come*. 1^a ed. Ed. Kelps, 1995.

GRAVIRIA, C. Toward a New Vision of the Inter-American Human Rights System. In: *Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional*. Ano LI, Nos. 113-118, Janeiro/Dezembro, 1998 p. 09-41

LAFER, C. *A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com Hannah Arendt*. São Paulo: Cias das Letras, 1998.

MONTORO, A. F. Cultura dos Direitos Humanos. In: MARCÍLIO, M. L. E PUSSOLI, L (coord.). *Cultura dos Direitos Humanos*. São Paulo: LTr, 1998. p.13 - 27.

PIOVESAN, F. *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*. São Paulo: Max Linomard, 1996.

PIOVESAN, F. *O sistema interamericano de promoção e proteção dos direitos humanos: O futuro do sistema*. mimeo. (Palestra proferida em 12 de junho de 2000 no Seminário: O Sistema Interamericano de Proteção e Promoção dos Direitos Humanos.)

PNUD. Relatório do desenvolvimento humano 2002. disponível em www.undp.org.br em Novembro de 2002.

RODRIGUEZ, M. E. “Os direitos econômicos, sociais e culturais: uma realidade inadiável.” In: *Revista Proposta* Ano 31, Março/Maio de 2002, no. 92.

Secretaria Geral da OEA *Documentos Básicos em Matéria de Direitos Humanos no Sistema Interamericano*. Washington, 1997.

SILO, M. R. C. O Que Acontece Hoje com os Direitos Humanos. In: MARCÍLIO, M. L. E PUSSOLI, L (coord.). *Cultura dos Direitos Humanos*. São Paulo: LTr, 1998. p. 183 - 195.

Sociedade Civil Brasileira. *Relatório da sobre o Cumprimento, pelo Brasil, do Pacto Internacional de Direitos Humanos*. Brasília, 2000.

TRINDADE, A. A. C Do Direito Econômico aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. In: CAMARGO, R. A. L. *Desenvolvimento Econômico e Intervenção do Estado na Ordem*

Constitucional: Estudos em homenagem ao professor Washington Peluso Albino de Souza. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1995. p. 9 - 38.

TRINDADE, A. A. C. A Evolução Doutrinária e Jurisprudencial da Proteção Internacional dos Direitos Humanos nos Planos Global e Regional: as primeiras quatro décadas. In: *Revista de Informação Legislativa*. Brasília: Senado Federal. Ano 23, No. 90, Abril/Junho, 1986. p. 233 - 288

TRINDADE, A. A. C. A II Conferência Mundial de Direitos Humanos: O legado de Viena. In: TRINDADE, A. A. C. (editor). *A Incorporação das normas internacionais de proteção dos direitos humanos no direito brasileiro*. 2^a. ed. San José: IIDH, 1996. p. 45 - 115.

TRINDADE, A. A. C. A proteção Internacional dos Direitos Humanos ao final do Século XX. In: MARIANO, B. D. e FECHIO FILHO, F. (orgs.) *A Proteção Nacional e Internacional dos Direitos Humanos: Seminário de Brasília*. Brasília: FIDEH, 1994 p. 99 - 115.

TRINDADE, A. A. C. *A Proteção Internacional dos Direitos Humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos básicos*. São Paulo: Saraiva, 1991.

TRINDADE, A. A. C. A questão da Implementação dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: Evolução e tendências atuais. In: *Revista Brasileira de Estudos Políticos*. Julho de 1990, número 71. p. 7 - 55.

TRINDADE, A. A. C. Democracia y Derechos Humanos: El Régimen Emergente de la Promoción Internacional de la Democracia y del Estado de Derecho. In: *Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos*. Ano I, vol. 1, Número 1 - 1999. p. 13 - 27.

TRINDADE, A. A. C. Memorial em Prol de uma Nova mentalidade quanto à Proteção dos Direitos Humanos. In: *Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional*. Ano LI, Nos. 113-118, Janeiro/Dezembro, 1998 p. 57-94

VASCO, M. A. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos. In: TRINDADE, A. A. C. (editor) *A Incorporação das Normas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos no Direito Brasileiro*. 2 ed. San José: IIDH, 1996. p. 653 - 661

